

con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869 y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, falla con las siguientes proposiciones: 1ª, la Justicia de la Union ampara y protege á Eugenio Carcelada, en el goce de las garantías que le otorgan los antes referidos artículos de la Constitucion general, y que le han sido violados haciéndolo servir de soldado en el Batallon número 14. 2ª, notifíquese por medio de exhorto que se librará á Tepic al juzgado de 1ª instancia, con el fin indicado, donde se halla el cuerpo citado. Publíquese y remítase este expediente á la Corte Suprema de Justicia, para su revision. El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.—*D. I. Trejo.*—*G. J. Gallegos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 15 de 1873. — Visto el juicio de amparo promovido ante el C. Juez de Distrito de Guadalajara por Mariana Gallardo en favor de su esposo Eugenio Carcelada, contra la providencia que lo retiene en el servicio de las armas. Considerando, que de autos consta que Carcelada fué tomado de leva y destinado al Batallon nº 14 de infantería contra su voluntad; así como tambien que no ha variado de parecer, resultando por lo mismo que se está violando en la persona del promovente el artículo 5º de la Constitucion general de la República,

Se decreta: que por sus propios y legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Guadalajara, en 24 de Marzo próximo pasado, que declara: la Justicia de la Union ampara y protege á Eugenio Carcelada contra la providencia que lo retiene en el servicio militar y contra lo que se ha promovido en el presente juicio.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia cer-

tificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordoñez.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 8 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Lic. Próspero Vega, en representacion del C. Rafael Romo, contra el prefecto político de Cudereyta, por la orden relativa á que se derribara una tápia que levantó Romo, obstruyendo un camino público.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. Lic. Próspero C. Vega, en representacion del C. Rafael Romo, dueño de la Hacienda de Quintillá, ha interpuesto el recurso de amparo con motivo de "que su principal habita en un apartado retiro, y que, habiendo sido mil veces asaltado allí por malas gentes, proyectó consultar á su seguridad, haciendo levantar una tápia frente á su hacienda. Como por allí pasa un camino, cuidó naturalmente de respetarlo, sin que hasta ahora haya habido un solo transeunte que se queje de su falta, ó siquiera de la mas leve molestia; y sin embargo, algu-

nos enemigos de Romo han procurado influir en el ayuntamiento de Cadereyta, y conseguido que este cuerpo le reclame y aun lo amenace. Así las cosas, recibió Romo una orden para que destruyese la tápia referida. Esa orden está firmada por el C. Antonio Resendiz y sellada con el sello de la prefectura de Cadereyta.

Consta por los documentos que obran á fojas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y exhorto de fojas 46 y siguientes, que el C. Rafael Romo obstruyó el antiguo camino de Cadereyta á Boyó, haciendo levantar una tápia, y que abrió un nuevo camino en lugar del interceptado. Por el documento de fojas 9 consta que el ayuntamiento de Cadereyta acordó que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de la construcción de la referida tápia.

De las pruebas rendidas, no aparece demostrada ni la ilegalidad del ayuntamiento de Cadereyta, ni la del presidente, ni tampoco la del que funge de prefecto, por lo que es inútil hacer observaciones sobre este punto. Baste solo decir que la providencia dictada por el ayuntamiento, está dentro del círculo de sus funciones administrativas, y que por lo mismo ha obrado esa corporación en la esfera de sus atribuciones. Conforme á la fracción 22 del artículo 72 de la Constitución, el Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación. En el caso, no se trata de una vía general, sino de una vecinal, que está al cuidado del ayuntamiento respectivo, y que la providencia que ha dictado solo tiende á su conservación. Es preciso observar que la autoridad judicial en materias administrativas de policía, no puede prescribir medidas especiales aplicables á casos ó individuos determinados. Perteneciendo la policía á la administración, esta prohibición hecha á los tribunales está fundada sobre la máxima de la división de los poderes. A los jueces solo corresponde hacer respetar la ley.

Apesar de ser ciertos estos principios,

hay otro conquistado por la ciencia y reconocido por nuestro derecho constitucional, á saber: que los tribunales deben rehusar toda autoridad á todo acto ilegal de los otros poderes. Armar al poder judicial de la Federación del derecho absoluto de escurrir cada uno de los actos del Ejecutivo ó del Legislativo, parece que es sacarlo de sus límites naturales; mas obligar por otra parte al mismo poder judicial á respetar, aun en los extravíos culpables, la acción de los demás poderes, sería quitar á los ciudadanos las garantías que les ofrece la Constitución. Pero en el caso, el ayuntamiento de Cadereyta en vez de cometer un atentado, se ha limitado al mantenimiento expedito de una antigua vía, con lo que ha defendido derechos propios del municipio en vez de atacar garantía individual alguna.

Por lo que, el promotor fiscal pide se deniegue el recurso intentado.

Querétaro, 5 de Marzo de 1873.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Marzo 5 de 1873.—Visto el presente recurso de amparo promovido por el C. Lic. Próspero C. Vega en nombre y representación del C. Rafael Romo, contra la orden de la prefectura de Cadereyta que le mandó derribar una tápia levantada por el quejoso enfrente de la hacienda de Quintilló, de su propiedad, obstruyendo con ella el camino público según la autoridad; con cuyo acto el C. Romo juzga violadas en su persona las garantías que otorga la Constitución de la República en sus artículos 16, 39, 41 y 109, al ser molestado en sus posesiones por autoridad que no es competente, siendo ilegales las del Estado. Visto el informe que con justificación rindió la autoridad ejecutora del acto reclamado; las pruebas rendidas por las partes; sus respectivos alegatos y la citación para sentencia, con lo mas que se tuvo presente y ver-

se debió. Considerando: que teniendo por objeto el presente recurso, el impedir que se viole ó trate de violarse alguna de las garantías concedidas al hombre por la Carta Fundamental de la Nación, es indispensable examinar si con el acto reclamado se vulnera alguna de las expresadas garantías á fin de deducir la procedencia del presente recurso. Considerando: que consta comprobado en autos por la confesion de la parte en su escrito de queja y en el alegato respectivo, por los oficios de fojas 9 y 10, por la exitativa del ayuntamiento del Distrito de Cadereyta fojas 11, por la Orden del gobierno del Estado fojas 14, por la declaracion conteste de tres testigos, cuya idoneidad ha reconocido la parte en su alegato fojas 50 y 52, y por último, del certificado expedido por el ayuntamiento de dicho Distrito fojas 51 y 56, que el C. Rafael Romo levantó una tápia en el frente de su hacienda, en el camino real ó de herradura que conduce á Boyé, con objeto de proveer á su seguridad y dar cumplimiento al decreto núm. 24, y su reglamento respectivo de 13 de Diciembre de 1871, expedidos por la Legislatura y Ejecutivo del Estado. Que así mismo aparece de la confesion de la parte en su alegato fojas 64 vuelta, de los oficios de fojas 10 y 11, de las declaraciones de los testigos antes referidos; del certificado fojas 51 y 56 otorgados por el presidente del ayuntamiento del Distrito de Cadereyta, que el camino que antes pasaba delante de la hacienda del quejoso, pasa hoy por detras de la tápia levantada por él. Considerando: que tratándose de caminos transversales y vecinales, estos dependen directamente del gobierno de los Estados, quienes son los solos competentes para cambiar la direccion de ellos ó su anchura; no teniendo por lo tanto, ningun particular, razon ni derecho para introducir reforma alguna en ellos sin previo consentimiento de la autoridad local respectiva, circunstancias que segun las constancias de autos no tuvo presentes el quejoso: que al

expelirse por el ayuntamiento la Orden origen del presente juicio, obró en el círculo de sus facultades. Considerando: que tanto en la comunicacion del ayuntamiento de Cadereyta fojas 9, como en la del gobierno del Estado fojas 1, consta que se mandó derribar la tápia levantada por Romo, á causa de obstruir el camino que conduce á Boyé, cumpliendo así con lo que previene el artículo 16 de la Constitucion general de fundar la causa del procedimiento. Considerando, por último: que respecto á la ilegalidad objetada á las autoridades del Estado, la parte de Romo ninguna prueba ha aducido ni hecho ninguna objecion á la existencia legal del ayuntamiento de Cadereyta, cuya corporacion fué la que previno á Romo despejase el camino que conduce á Boyé, que con la tápia levantada habia obstruido; á cuya Orden no dando cumplimiento el referido Romo, dicha corporacion se dirigió al prefecto del Distrito fojas 9, en 7 de Noviembre de 1872, á fin de que en cumplimiento del artículo 118, fraccion VIII de la Constitucion local, le impartieran el auxilio necesario para el cumplimiento de su acuerdo, dirigiéndose á su vez el prefecto al gobierno del Estado, lo que motivó la Orden de fojas 14. Por las razones expuestas, de conformidad con lo pedido por el promotor fiscal y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: Que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Rafael Romo representado por el C. Lic. Próspero Vega, contra la Orden que le mandó derribar la tápia por él levantada en el camino que conduce á Boyé. Reponga el papel comun invertido, por el del sello respectivo. Notifíquese á las partes y prévia la saca de copias de esta sentencia, clévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así en definitiva lo decretó y mandó al C. juez de Distrito del Estado, Lic. Víctor de la Peña, y firmó. Doy fé.—*V. de la Peña*. —*Francisco Ruiz*, secretario.

Es copia. Querétaro, Marzo 10 de 1873.
—Francisco Ruiz, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 16 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro por el Lic. D. Próspero Vega, en representación de D. Rafael Romo, contra el prefecto político de Cadereyta por la orden relativa á que se derribara una tápia que levantó Romo frente á la hacienda de Quintillé, obstruyendo el camino público que conduce á Boyé; y considerando: que el prefecto político de Cadereyta ha procedido en el caso, dentro de la órbita de sus atribuciones, sosteniendo la orden en apoyo del acuerdo del ayuntamiento de Cadereyta, relativo á que Romo dejara expedito el camino, de lo que resulta que no están vulneradas en la persona del quejoso las garantías individuales que invoca, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 5 del mes próximo pasado por el juez de Distrito de Querétaro, que declara que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Rafael Romo, representado por el Lic. Próspero C. Vega, contra la orden que le mandó derribar la tápia por él levantada en el camino que conduce á Boyé.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Luza.—S. Guzman.*

—*L. Velasquez.—M. Zavala.—Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 24 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por el C. Jesus García, contra la providencia que lo reliene en el servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez.

El Promotor fiscal dice: En favor de Jesus García y contra el Coronel del 12º batallón, entabla amparo el defensor de procesos C. Lic. Ignacio Matute, alegando que García fué tomado de leva y consignado al servicio de las armas por el Cefe político de esta Ciudad, contra lo dispuesto por los artículos 2º y 5º de la Constitución. El C. Coronel del 12º informa que el amparante lo fué consignado por el Cefe deemplazos.

El suscrito cree conveniente que se pida informe á la autoridad política, sobre los motivos que tuvo para consignar á García, y dando por cierto lo alegado en favor de éste por no haberse contradicho por el Coronel informante como ejecutivo del acto reclamado,

Concluye pidiendo: que la Justicia federal ampare y proteja al repetido Jesus García, contra el servicio militar forzado á que se lo obliga en el 12º batallón, con infracción de la garantía consignada en el artículo 5º Constitucional.

Guadalajara, Febrero 28 de 1873.—*A. Annarena.*